

TRATADO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
EL GOBIERNO DE AUSTRALIA
SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL.

El Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de Australia,

Deseando cooperar con el objeto de facilitar la
administración de justicia en materia penal.

han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1
AMBITO DE APLICACION

1.- Las Partes Contratantes, de conformidad con este Tratado, se otorgaran asistencia mutua en investigaciones y procedimientos con respecto a asuntos penales.

2.- El término "asunto penal" incluye asuntos relacionados con infracciones a leyes fiscales, derechos de aduana, control de divisas u otras cuestiones financieras o fiscales.

3.- La mencionada asistencia consistirá en:

- a) tomar declaraciones de personas;
- b) proveer documentos y otra información de archivo;
- c) localizar e identificar personas;
- d) ejecutar búsquedas y secuestro de bienes, incluyendo registros domiciliarios;
- e) medidas para localizar, embargar y decomisar el producto del delito y para ejecutar penas pecuniarias en relación con un delito;
- f) facilitar el traslado de detenidos para prestar declaración o para asistir en las investigaciones;
- g) facilitar el traslado de otras personas para prestar declaración o para asistir en las investigaciones;
- h) notificar órdenes y actos judiciales; e

i) otro tipo de asistencia acorde con los fines de este Tratado y que no sea incompatible con las leyes del Estado Requerido.

4.- la asistencia no incluirá:

a) el arresto o detención de cualquier persona con fines de extradición;

b) la ejecución en el Estado Requerido de sentencias impuestas en el Estado Requirente, excepto en la medida que lo permite el artículo 17;

c) el traslado de condenados para cumplir sentencia

ARTICULO 2 OTRO TIPO DE ASISTENCIA

Este Tratado no será contrario a las obligaciones subsistentes entre las Partes Contratantes en virtud de otros tratados o acuerdos, ni evitará que las Partes Contratantes se proporcionen asistencia entre sí conforme con otros tratados o acuerdos.

ARTICULO 3 AUTORIDADES COMPETENTES Y OFICINA CENTRAL

1.- La solicitud de asistencia podrá ser formulada por persona autorizada conforme a la legislación del Estado Requirente, que sea autoridad judicial, o Fiscal General, o sus delegados o miembros del Ministerio Fiscal.

2.- Las Partes Contratantes designarán una Oficina Central, para transmitir y recibir las solicitudes objeto de este Tratado. La Oficina Central de la República Argentina será el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y la Oficina Central de Australia, el Attorney General Department. Cuando una Parte Contratante designe otra Oficina Central lo comunicará a la otra Parte, por vía diplomática.

3.- La solicitud de asistencia se remitirá por vía diplomática. Sin embargo en caso de urgencia., la solicitud se remitirá a través de la Oficina Central y se confirmará, tan pronto como sea posible, por vía diplomática.

4.- Las Partes Contratantes pueden encomendar a sus Cónsules la práctica de diligencias permitidas por la legislación del Estado Requerido.

ARTICULO 4
DENEGACION DE ASISTENCIA

1.- Se denegará la asistencia si:

a) el requerimiento tiene relación con un delito que el Estado Requerido contempla como:

- i) un delito de carácter político; o
- ii) un delito previsto en la ley militar y que no sea también un delito según la ley penal ordinaria;

b) el requerimiento se refiere al juzgamiento de un delito con respecto al cual la persona ha sido finalmente absuelta o perdonada o ha cumplido la sentencia que se le impuso;

c) existe una base lo suficientemente sólida para creer que el requerimiento de asistencia ha sido hecho para facilitar la persecución de una persona por motivos de su raza, religión, nacionalidad u opinión política, o que la situación de esa persona puede ser perjudicada por cualquiera de estos motivos:

d) el Estado Requerido entiende que, de otorgar el requerimiento, su soberanía, su seguridad, interés nacional u otros intereses fundamentales se podrían ver seriamente perjudicados.

2.- La asistencia podrá denegarse si:

a) se refiere al secuestro, decomiso de bienes o al registro domiciliario, si el requerimiento se relaciona con actos u omisiones que no constituirían delito de haber tenido lugar dentro de la jurisdicción del Estado Requerido;

b) el requerimiento se relaciona con el juzgamiento o castigo de una persona por un delito cometido fuera del territorio del Estado Requirente y las leyes del Estado Requerido no prevén el castigo de un delito cometido fuera de su territorio en circunstancias similares;

c) el requerimiento se refiere al juzgamiento de una persona por un delito que, de haberse cometido en el Estado Requerido, no sería punible debido a la prescripción, o cualquier otra razón; o

d) La prestación de asistencia perjudicara una investigación o proceso en el Estado Requerido o la seguridad de una persona, o impusiera una carga excesiva sobre los recursos de ese Estado.

3.- Antes de negarse a otorgar un requerimiento de asistencia, el Estado Requerido considerará si la asistencia se puede

otorgar sujeta a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Requirente acepta la asistencia sujeta a esas condiciones, éste cumplirá con las mismas.

ARTICULO 5 CONTENIDO DE LOS REQUERIMIENTOS

1.- Los requerimientos de asistencia deberán incluir:

- a) el nombre de la autoridad competente que dirige la investigación o proceso en relación con el requerimiento;
- b) una descripción de la naturaleza del asunto penal, incluyendo un informe sobre las leyes pertinentes;
- c) excepto en los casos de requerimientos de notificación de órdenes y actos judiciales, una descripción de los actos y omisiones que constituyen el delito;
- d) el propósito por el que se hace el requerimiento y el tipo de asistencia que se solicita;
- e) detalles sobre cualquier procedimiento o requisito especial que el Estado Requirente desea que se siga;
- f) la condición, si la hubiese, de mantener la confidencia y las razones para ello; y
- g) la especificación de cualquier límite de tiempo en el que se desea se cumpla con el requerimiento.

2.- Los requerimientos de asistencia, en la medida de lo necesario y dentro de lo posible, incluirán además:

- a) la identidad, nacionalidad y localización de la persona o personas sujetas a la investigación o proceso;
- b) una aclaración en cuanto a si se requiere declaración bajo juramento u otro tipo de declaración;
- c) una descripción de la información, declaración o evidencia que se requiera;
- d) una descripción de los documentos, comprobantes u otras pruebas solicitadas, así como la individualización de la persona a la que habrá que requerirle la entrega; y
- e) la información referente a los subsidios y gastos a los que una persona que comparezca en el Estado Requirente tendrá derecho.

3.- Todos los documentos que se envíen en apoyo de un requerimiento estarán acompañados de una traducción en el idioma del Estado Requerido.

4.- Si el Estado Requerido considera que la información contenida en el requerimiento no es suficiente para permitir que se cumpla con el requerimiento, podrá solicitar que se facilite información adicional.

ARTICULO 6
EJECUCION DE REQUERIMIENTOS

- 1.- En la medida en que sus leyes lo permitan, el Estado Requerido proporcionará asistencia de conformidad con los requisitos especificados en el requerimiento y responderá al mismo lo más pronto posible después de haberlo recibido.
- 2.- El Estado Requerido podrá posponer la entrega del material remitido, si dicho material es necesario para procedimientos criminales o civiles en trámite en ese Estado. El Estado Requerido proporcionará copias certificadas de documentos de ser solicitadas.
- 3.- El Estado Requerido informará con celeridad al Estado Requirente sobre las circunstancias que puedan ser causa de un retraso importante en responder a un requerimiento.
- 4.- El Estado Requerido informará con celeridad al Estado Requirente sobre su decisión de no cumplir en la totalidad o en parte con un requerimiento de asistencia y las razones para tomar esa decisión.

ARTICULO 7
DEVOLUCION DE MATERIAL AL ESTADO REQUERIDO

Cuando así lo solicite el Estado Requerido, el Estado Requirente, después de finalizar los procedimientos, devolverá el material proporcionado en cumplimiento del requerimiento.

ARTICULO 8
PROTECCION DE CONFIDENCIA Y RESTRICCION DEL EMPLEO DE
EVIDENCIAS E INFORMACION

- 1.- El Estado Requerido, si se le pide, mantendrá confidencia sobre la solicitud de asistencia, el contenido del requerimiento, los documentos de apoyo, así como sobre el otorgamiento de dicha asistencia. Si el requerimiento no se puede ejecutar, sin violar la confidencia, el Estado Requerido informará debidamente al Estado Requirente, el cual determinará entonces si el requerimiento se debe ejecutar a pesar de esto.
- 2.- El Estado Requirente, si se le pide, mantendrá la confidencia de la evidencia e información proporcionada por el Estado Requerido, excepto en la medida en que la evidencia e información se necesite para la investigación y procedimientos descriptos en el requerimiento.

3.- El Estado Requirente no empleará la evidencia obtenida ni la información derivada de la misma para otros fines que los especificados en el requerimiento, sin el previo consentimiento del Estado Requerido.

ARTICULO 9 CITACION DE PERSONAS

1.- Cuando el Estado Requirente solicite la presencia de una persona ante sus tribunales, efectuará el requerimiento con no menos de 30 días de anticipación a la fecha fijada para el comparendo.

2.- En casos de urgencia el Estado Requerido puede obviar esta exigencia.

ARTICULO 10 PRESTACION DE DECLARACION

1.- A solicitud del Estado Requirente el Estado Requerido tomará declaración de personas.

2.- A los fines de este Tratado el prestar declaración incluirá la presentación de documentos, comprobantes u otro material probatorio.

3.- A los fines de los requerimientos que se mencionan en este artículo, el Estado Requirente especificará el tema sobre el cual las personas serán interrogadas, incluyendo cualquier pregunta a ser formulada.

4.- Cuando de acuerdo con un requerimiento de asistencia una persona vaya a prestar declaración, las partes del proceso, sus representantes legales y los representantes del Estado Requirente, podrán, sujeto a las leyes del Estado Requerido, comparecer e interrogar a la persona que preste declaración. A los fines de este párrafo el Estado Requirente hará saber al Estado Requerido los nombres de las partes y de cualquier representante habilitado al efecto.

5.- Una persona a la que se le pida que preste declaración en el Estado Requerido en relación con un requerimiento de asistencia podrá negarse a prestar declaración si:

- a) las leyes del Estado Requerido le permitiesen negarse a prestar declaración en circunstancias similares en procedimientos que se originaran en el Estado Requerido; o
- b) las leyes del Estado Requirente le permitiesen negarse a prestar declaración en tales procedimientos en el Estado

Requirente.

6.- Si alguna persona alegare que en el Estado Requirente existe el derecho a negarse a prestar declaración, el Estado Requerido tomará como referencia un certificado de la Oficina Central del Estado Requirente.

ARTICULO 11 DISPONIBILIDAD DE DETENIDOS PARA PRESTAR DECLARACION O ASISTIR EN LAS INVESTIGACIONES

1.- A petición del Estado Requirente, se podrá trasladar a un detenido del Estado Requerido en forma temporal al Estado Requirente para prestar declaración o para asistir en las investigaciones.

2.- El Estado Requerido no trasladará a un detenido al Estado Requirente a menos que el detenido lo consienta.

3.- Mientras que la sentencia en el Estado Requerido no haya expirado, el Estado Requirente mantendrá al detenido bajo custodia y lo devolverá bajo custodia al Estado Requerido una vez concluidos los procedimientos en relación a los cuales se solicitó su traslado, o tan pronto como su presencia ya no sea necesaria.

4.- Si la pena impuesta a una persona trasladada bajo este artículo expira mientras que la persona se encuentra en el Estado Requirente, dicha persona será puesta en libertad y tratada como una persona de las definidas en el artículo 12.

ARTICULO 12 FACILITAR EL TRASLADO DE OTRAS PERSONAS PARA PRESTAR DECLARACION O ASISTIR EN LAS INVESTIGACIONES

1.- Una persona en el Estado Requerido puede, a pedido del Estado Requirente, ser invitada a comparecer en el Estado Requirente para prestar declaración o asistir en las investigaciones.

2.- El Estado Requerido, si está satisfecha de que se tomarán las medidas necesarias para proteger la seguridad de esa persona por parte del Estado Requirente, invitará a la persona a que comparezca en los procedimientos o que asista en las investigaciones, para lo cual tratará de obtener su consentimiento.

ARTICULO 13 INMUNIDAD

1.- La persona que consienta en prestar declaración o en asistir en las investigaciones en el Estado Requiriente bajo los artículos 11 o 12, no será detenida, juzgada o castigada en el Estado Requiriente por ningún delito, o involucrada en un procedimiento civil al cual no estaría sujeta de no encontrarse en el Estado Requiriente, en relación a cualquier acto u omisión que precediera la partida de dicha persona del Estado Requerido. Sin el consentimiento de dicha persona no se le tomará declaración en ningún procedimiento ajeno al requerimiento.

2.- El párrafo 1 de este artículo dejará de tener validez si la persona teniendo libertad de partir, no ha salido del Estado Requiriente dentro de un período de treinta días después de haber sido notificada oficialmente que su presencia ya no es requerida, o cuando habiendo salido haya regresado.

3.- La persona que comparezca ante una autoridad en el Estado Requiriente de conformidad con un requerimiento bajo los artículos 11 o 12, no será perseguida sobre la base de su declaración, pero estará sujeta a las leyes de ese Estado en relación a los delitos de desacato y perjurio.

4.- La persona que no consienta a una petición en relación con los artículos 11 o 12, no estará sujeta a ninguna sanción o medida coercitiva por ese motivo, aunque el requerimiento la contenga.

ARTICULO 14 ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ACCESO PUBLICO Y OFICIALES

1.- El Estado Requerido deberá entregar copias de documentos u otra información de archivos accesibles al público, o que puedan ser adquiridos por el público.

2.- El Estado Requerido proporcionará copias de cualquier documento oficial u otra información de archivos oficiales, de la misma forma y bajo las mismas condiciones que dicho documento o información de archivo se proporciona a sus propias autoridades policiales o judiciales.

ARTICULO 15
CERTIFICACION Y AUTENTICACION

1.- El requerimiento de asistencia y los documentos que lo acompañan, así como los documentos y otro material que se provea en respuesta al mismo, serán certificados o autenticados de conformidad con el párrafo 2.

2.- A los efectos de este Tratado, un documento se considerará certificado o autenticado si:

- a) se presume firmado o certificado por alguna de las personas especificadas en el párrafo 1. del artículo 3 del Estado que lo envía; y
- b) se presume sellado con el sello oficial de un Ministro de Estado o de un Ministerio de dicho Estado.

3.- Las firmas y el sello que aparecen en los documentos presentados por la vía diplomática, se considerarán correspondientes a las personas y al Ministerio que se mencionan en el párrafo 2 de este artículo.

ARTICULO 16
BUSQUEDA Y SECUESTRO DE BIENES

1.- El Estado Requerido, en la medida que lo permitan sus leyes, llevará a cabo requerimientos de búsqueda, secuestro y entrega de cualquier tipo de material al Estado Requirente, siempre que el requerimiento contenga la información necesaria para justificar este tipo de acción bajo las leyes del Estado Requerido.

2.- El Estado Requerido facilitará la información que solicite el Estado Requirente relacionada con el resultado de cualquier búsqueda, el lugar de secuestro, las circunstancias del secuestro y la subsiguiente custodia de los bienes secuestrados.

3.- El Estado Requirente observará cualquier condición que el Estado Requerido imponga en relación a los bienes secuestrados que se entreguen al Estado Requirente.

ARTICULO 17
PRODUCTOS DEL DELITO

1.- El Estado Requerido, bajo requerimiento, se esforzará en averiguar si dentro de su jurisdicción se encuentra cualquier producto de un delito y notificará los resultados de las pesquisas al Estado Requirente. Al efectuar el requerimiento,

el Estado Requirente notificará al Estado Requerido la base de su creencia de que dichos productos del delito se pueden hallar en su jurisdicción.

2.- Cuando, en cumplimiento del párrafo 1, se encuentren los productos del delito cuya existencia se sospechaba, el Estado Requerido, a pedido del Estado Requirente, tomará las medidas necesarias permitidas por sus leyes para evitar cualquier transacción, transferencia o enajenación de los mismos mientras esté pendiente una decisión final sobre dichos productos.

3.- Cuando el condenado por un delito mantenga la propiedad de los productos de dicho delito, el Estado Requerido dará curso a una sentencia penal pecuniaria con relación al delito o a una orden de decomiso o confiscación respecto de los productos del delito, emitidos por un tribunal del Estado Requirente.

4.- Cuando el condenado por un delito haya dispuesto de los productos del delito, un tribunal del Estado Requerido, a solicitud del Estado Requirente, determinará si el tercero los obtuvo sin haber sabido o sospechado que se trataba o podría haberse tratado de los productos del delito. Si el tribunal del Estado Requerido determina que el tercero no fue un tercero de buena fe, ordenará el decomiso o confiscación de los bienes.

5.- El Estado Requerido, con respecto a los bienes a que se refieren los párrafos 3 y 4, retendrá la mitad de su valor y transferirá otro tanto al Estado Requirente. Si se trata de propiedad de bienes raíces, el Estado Requerido venderá dichos bienes y procederá con el producto de la venta de acuerdo con lo establecido en este párrafo.

6.- A los fines de este artículo, el concepto de productos de un delito incluye cualquier propiedad obtenida directa o indirectamente como resultado de la comisión de un delito y los instrumentos utilizados en la comisión del delito.

ARTICULO 18 ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

Las Oficinas Centrales de cada una de las Partes Contratantes podrán realizar dentro del marco de este Tratado, acuerdos complementarios tendientes a facilitar su funcionamiento.

ARTICULO 19
REPRESENTACION

A los efectos de este Tratado, el Estado Requerido. a través de sus autoridades competentes. debera brindar representación a los intereses del Estado Requirente en el procedimiento. El representante designado por el Estado Requerido tendra legitimación procesal para intervenir en ese procedimiento.

ARTICULO 20
GASTOS

El Estado Requerido cubrirá el costo relacionado con el requerimiento de asistencia con la salvedad de que el Estado Requirente cubrira:

- a) los gastos relacionados con el traslado de cualquier persona a/o desde el territorio del Estado Requerido y cualquier subsidio o gastos pagables a dicha persona mientras se encuentre en el Estado Requirente en relación a un requerimiento bajo los artículos 11 o 12;
- b) los gastos relacionados con el traslado de funcionarios de custodia o de compañía; y
- c) si lo solicitase el Estado Requerido, gastos excepcionales resultantes del cumplimiento del requerimiento.

ARTICULO 21
CONSULTA

Las Partes Contratantes se consultarán con prontitud, a petición de cualquiera de ellas, en relación a la interpretación, la aplicación o la ejecución de este Tratado, bien en forma general o con respecto a un caso en particular.

ARTICULO 22
ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACION

- 1.- Este Tratado entrará en vigor a los treinta días a partir de la fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado por escrito que sus requisitos respectivos para la entrada en vigor de este Tratado se han cumplimentado
- 2.- Este Tratado será también aplicable a requerimientos

efectuados en relación con actos u omisiones que hubieren tenido lugar con anterioridad a su entrada en vigor.

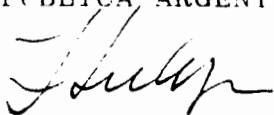
3.- Cualquiera de las Partes Contratantes podrá notificar a la otra por escrito, en cualquier momento, su intención de denunciar este Tratado, en cuyo caso dejara de estar en vigor a los ciento ochenta días de la fecha de la notificación respectiva.

4.- Sin embargo, cuando una de las Partes Contratantes haya notificado la denuncia de acuerdo al párrafo 3, este Tratado continuara aplicándose a los requerimientos efectuados antes de dicha notificación.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, estando debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Tratado.

HECHO en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto del año mil novecientos noventa, en dos ejemplares originales en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE
REPUBLICA ARGENTINA



POR EL GOBIERNO DE LA
AUSTRALIA



TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Government of the Argentine Republic and the Government of Australia

DESIRING to co-operate in order to facilitate the administration of justice in criminal matters,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
SCOPE OF APPLICATION

1. The Contracting Parties shall, in accordance with this Treaty, grant to each other assistance in investigations or proceedings in respect of criminal matters.
2. Criminal matter includes matters connected with offences against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control and other revenue matters.
3. Such assistance shall consist of:
 - a) taking of evidence and obtaining of statements of persons;
 - b) provision of documents and other records;
 - c) location and identification of persons;
 - d) execution of requests for search and seizure including the search of private premises;
 - e) measures to locate, restrain and forfeit the proceeds of offences and to recover pecuniary penalties in respect of offences;
 - f) making prisoners available to give evidence or to assist investigations;
 - g) making other persons available to give evidence or to assist investigations;
 - h) service of documents; and
 - i) other assistance consistent with the objects of this Treaty which is not inconsistent with the law of the Requested State.

4. Assistance shall not include:

- a) the arrest or detention of any person with a view to extradition;
- b) the execution in the Requested State of criminal judgments imposed in the Requesting State except to the extent permitted by Article 17; and
- c) the transfer of prisoners to serve sentences.

ARTICLE 2 OTHER ASSISTANCE

This Treaty shall not derogate from obligations subsisting between the Contracting Parties whether pursuant to other Treaties or arrangements or otherwise nor prevent the Contracting Parties providing assistance to each other pursuant to other treaties or arrangements.

ARTICLE 3 COMPETENT AUTHORITIES AND CENTRAL OFFICE

1. A request for assistance may be made by a person authorized by the law of the Requesting State being a judicial authority, public prosecutor, the Attorney-General or his or her delegate.

2. The Contracting Parties shall each appoint a Central Office to transmit and receive requests for the purpose of this Treaty. The Central Office for the Argentine Republic shall be the Ministry of External Relations and Worship and the Central Office of Australia shall be the Attorney-General's Department, Canberra. Where a Contracting Party designates another authority for the purpose of this Article, it shall do so through the diplomatic channel.

3. The request for assistance shall be conveyed by the diplomatic channel. Nevertheless, in cases of urgency, the request shall be made through the Central Office and shall be confirmed at the earliest possible opportunity through the diplomatic channel.

4. The Contracting Parties may entrust their consuls with the execution of procedures permitted by the law of the Requested State.

ARTICLE 4
REFUSAL OF ASSISTANCE

1. Assistance shall be refused if:

- a) the request relates to an offence that is regarded by the Requested State as:
 - (i) an offence of a political character; or
 - (ii) an offence under military law which is not also an offence under the ordinary criminal law;
- b) the request relates to the prosecution of a person for an offence in respect of which the person has been finally acquitted or pardoned or has served the sentence imposed;
- c) there are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made to facilitate the prosecution of a person on account of that person's race, religion, nationality or political opinions or that that person's position may be prejudiced for any of these reasons; or
- d) the Requested State is of the opinion that the request, if granted, would seriously impair its sovereignty, security, national interest or other essential interests.

2. Assistance may be refused if:

- a) the request seeks the securing or forfeiture of property or the search of private premises and the acts or omissions would not constitute the offence to which the request relates, had they taken place within the jurisdiction of the Requested State;
- b) the request relates to the prosecution or punishment of a person for an offence which is committed outside the territory of the Requesting State and the law of the Requested State does not provide for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances;
- c) the request for assistance relates to the prosecution of a person for an offence which, had it been committed in the Requested State, could no longer be prosecuted by reason of lapse of time or any other reason; or
- d) the provision of the assistance sought could prejudice an investigation or proceeding in the Requested State, prejudice the safety of any person or impose an excessive burden on the resources of that State.

3. Before refusing to grant a request for assistance the Requested State shall consider whether assistance may be granted subject to such conditions as it deems necessary. If the Requesting State accepts assistance subject to these conditions, it shall comply with the conditions.

ARTICLE 5 CONTENTS OF REQUESTS

1. Requests for assistance shall include:

- a) the name of the competent authority conducting the investigation or proceedings to which the request relates;
- b) a description of the nature of the criminal matter including a statement of the relevant laws;
- c) except in cases of requests for service of documents, a description of the acts or omissions which constitute the offence;
- d) the purpose for which the request is made and the nature of the assistance sought;
- e) details of any particular procedure or requirement that the Requesting States wishes to be followed;
- f) the requirements, if any, of confidentiality and the reasons therefor; and
- g) specification of any time limit within which compliance with the request is desired.

2. Requests for assistance, to the extent necessary and insofar as possible, shall also include:

- a) the identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of the investigation or proceeding;
- b) a statement as to whether a sworn or other type of declaration is required;
- c) a description of the information, statement or evidence sought;
- d) a description of the documents, records or articles of evidence to be produced as well as a description of the appropriate person to be asked to produce them; and

- e) information as to the allowances and expenses to which a person appearing in the Requesting State will be entitled.

3. All documents submitted in support of a request shall be accompanied by a translation into the language of the Requested State.

4. If the Requested State considers that the information contained in the request is not sufficient for the purpose of this Treaty to enable the request to be dealt with, that State may request that additional information be furnished.

ARTICLE 6 EXECUTION OF REQUESTS

1. To the extent permitted by its law, the Requested State shall provide such assistance in accordance with the requirements specified in the request and shall respond to the request as soon as practicable after it has been received.

2. The Requested State may postpone the delivery of material requested if such material is required for Proceedings in respect of criminal or civil matters in that State. The Requested State shall, upon request, provide certified copies of documents.

3. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of circumstances, when they become known to the Requested State, which are likely to cause a significant delay in responding to the request.

4. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of its decision not to comply in whole or in part with a request for assistance and the reason for that decision.

the

ARTICLE 7 RETURN OF MATERIAL TO REQUESTED STATE

Where required by the Requested State, the Requesting State, after the completion of the proceedings, shall return to the Requested State material provided by the Requested State in fulfillment of the request.

ARTICLE 8
PROTECTING CONFIDENTIALITY AND RESTRICTING USE OF
EVIDENCE AND INFORMATION

1. The Requested State, if so requested, shall keep the application for assistance, the contents of the request and its supporting documents, and the fact of granting of such assistance, confidential. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested State shall so inform the Requesting State which shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

2. The Requesting State, if so requested, shall keep confidential evidence and information provided by the Requested State, except to the extent that the evidence and information is needed for the investigation and proceeding described in the request.

3. The Requesting State shall not use evidence obtained, nor information derived therefrom, for purposes other than those stated in a request without the prior consent of the Requested State.

ARTICLE 9
SUMMONS AND SUBPOENA

1. Where the Requesting State requires the attendance of a person before its Courts, it shall request the service of the summons or subpoena not less than 30 days before the date on which the attendance is required.

2. In urgent cases the Requested State may waive this requirement.

ARTICLE 10
TAKING OF EVIDENCE

1. At the request of the Requesting State, the Requested State shall take the evidence or statements of persons.

2. For the purposes of this Treaty, the giving or taking of evidence shall include the production of documents, records or other material.

3. For the purposes of requests under this Article the Requesting State shall specify the subject matter about which persons are to be examined, including any questions to be put.

4. Where, pursuant to a request for assistance, a person is to give evidence, the parties to the relevant proceedings in the Requesting State, their legal representatives and representatives of the Requesting State may, subject to the laws of the Requested State, appear and question the person giving that evidence. For the purposes of this paragraph the Requesting State shall advise the Requested State of the names of the parties and any representatives entitled to attend.

5. A person who is required to give evidence in the Requested State pursuant to a request for assistance may decline to give evidence where either:

- a) the law of the Requested State would permit that person to decline to give evidence in similar circumstances in proceedings which originated in the Requested State; or
- b) where the law of the Requesting State would permit that person to decline to give evidence in such proceedings in the Requesting State.

6. If any person claims that there is a right to decline to give evidence under the law of the Requesting State, the Requested State shall, with respect thereto, rely on a certificate of the Central Office of the Requesting State.

ARTICLE 11 AVAILABILITY OF PRISONERS TO GIVE EVIDENCE OR ASSIST INVESTIGATIONS

1. A prisoner in the Requested State may at the request of the Requesting State be temporarily transferred to the Requesting State to give evidence or assist investigations.

2. The Requested State shall not transfer a prisoner to the Requesting State unless the prisoner consents.

3. While the original sentence of a prisoner in the Requested State has not expired, the Requesting State shall hold the prisoner in custody and shall return that prisoner in custody to the Requested State at the conclusion of the proceedings in relation to which transfer to the Requesting State was sought or at such earlier time as that prisoner's presence is no longer required.

4. Where the sentence imposed on a person transferred under this Article expires while the person is in the Requesting State, that person shall thereafter be treated as a person referred to in Article 12.

ARTICLE 12
FACILITATING ATTENDANCE OF OTHER PERSONS TO GIVE EVIDENCE
OR ASSIST INVESTIGATIONS

1. A person in the Requested State may, at the request of the Requesting State, be invited to appear in the Requesting State to give evidence or to assist investigations.

2. The Requested State shall, if satisfied that satisfactory arrangements for that person's security will be made by the Requesting State, invite the person to consent to appear in proceedings or to assist in the investigations.

ARTICLE 13
IMMUNITY

1. A person who consents to give evidence or assist an investigation in the Requesting State under Articles 11 and 12 shall not be detained, prosecuted or punished in the Requesting State for any offence, or be subject to any civil suit being a civil suit to which the person could not be subjected if the person were not in the Requesting State, in respect of any act or omission which preceded the person's departure from the Requested State. Without that person's consent, he or she shall not be required to give evidence in any proceeding other than the proceeding to which the request relates.

2. Paragraph 1 of this Article shall cease to apply if that person, being free to leave, has not left the Requesting State within a period of thirty days after that person has been officially notified that that person's presence is no longer required or, having left, has returned.

3. A person appearing in a proceeding in the Requesting State pursuant to a request under Articles 11 or 12 shall not be subject to prosecution based on his or her testimony except that that person shall be subject to the laws of that State in relation to contempt and perjury.

4. A person who does not consent to a request pursuant to Articles 11 or 12 shall not, by reason thereof, be liable to any penalty or be subjected to an coercive measure notwithstanding any contrary statement in the request.

ARTICLE 14
PROVISION OF PUBLICLY AVAILABLE AND OFFICIAL DOCUMENTS

1. The Requested State shall provide copies of any documents or records that are open to public access as part of a public register or otherwise, or that are available for

purchase by the public.

2. The Requested State shall provide copies of any official document or record in the same manner and under the same conditions as such document or record may be provided to its own law enforcement and judicial authorities.

ARTICLE 15 CERTIFICATION AND AUTHENTICATION

1. A request for mutual assistance and the supporting documents thereto, as well as documents or other material supplied in response to such a request, shall be certified or authenticated in accordance with paragraph 2.

2. A document is certified or authenticated for the purpose of this Treaty if:

- a) it purports to be signed or certified by any person specified in paragraph 1 of Article 3 of the State sending the document; and
- b) it purports to be sealed with an official seal of a minister of state or of a department of the Government of that State.

3. The signatures and seal on documents presented through the diplomatic channel shall be deemed to be those of the persons and the department referred to in paragraph 2 of this Article.

ARTICLE 16 SEARCH AND SEIZURE

1. The Requested State shall insofar as its law permits carry out requests for search, seizure and delivery of any material to the Requesting State provided the request contains information that would justify such action under the law of the Requested State.

2. The Requested State shall provide such information as may be required by the Requesting State concerning the result of any search, the place of seizure, the circumstances of seizure, and the subsequent custody of the property seized.

3. The Requesting State shall observe any conditions imposed by the Requested State in relation to any seized property which is delivered to the Requesting State.

ARTICLE 17
PROCEEDS OF OFFENCES

1. The Requested State shall, upon request, endeavour to ascertain whether any proceeds of an offence are located within its jurisdiction and shall notify the Requesting State of the results of its inquiries. In making the request, the Requesting State shall notify the Requested State of the basis of its belief that such proceeds may be located in its jurisdiction.

2. Where pursuant to paragraph 1 suspected proceeds of an offence are found the Requested State, upon request by the Requesting State, shall take such measures as are permitted by its law to prevent any dealing in, transfer or disposal of, those suspected proceeds of the offence, pending a final determination in respect of those proceeds.

3. Where the person convicted of an offence retains ownership of the proceeds of the offence of which he or she was convicted, the Requested State shall give effect to a pecuniary penalty order in respect of the offence or to a forfeiture or confiscation order in respect of the proceeds of the offence made by a court of the Requesting State.

4. Where the person convicted of an offence has disposed of the proceeds of the offence of which he or she was convicted, a court of the Requested State shall, at the request of the Requesting State, determine whether the transferee obtained the property without notice that it was or may have been the proceeds of an offence. Where the court of the Requested State determines that the transferee was not a bona fide third party it shall order the forfeiture or confiscation of the property.

5. The Requested State shall with respect to the property referred to in paragraphs 3 and 4, retain one half of the value and transfer the remainder to the Requesting State. Where the property is real property the Requested State shall sell that property and disburse the proceeds of that sale in accordance with this paragraph.

6. For the purpose of this Article, proceeds of an offence includes any property obtained directly or indirectly as a result of the commission of an offence and instrumentalities used in the commission of the offence.

ARTICLE 18
SUBSIDIARY ARRANGEMENTS

The Central Offices of the Contracting Parties may enter into subsidiary arrangements consistent with the purposes of

this Treaty in order to facilitate its functioning.

ARTICLE 19 REPRESENTATION

For the purposes of this Treaty, the Requested State, through its competent authorities, shall afford representation of the interests of the Requesting State in any proceedings. The representative appointed by the Requested State shall be legally authorized to act in those proceedings.

ARTICLE 20 EXPENSES

The Requested State shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the Requesting State shall bear:

- a) the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested State, and any fees, allowances or expenses payable to that person while in the Requesting State pursuant to a request under Articles 11 or 12;
- b) the expenses associated with conveying custodial or escorting officers; and
- c) where required by the Requested State, exceptional expenses in fulfilling the request.

ARTICLE 21 CONSULTATION

The Contracting Parties shall consult promptly, at the request of either, concerning the interpretation, the application or the carrying out of this Treaty either, generally or in relation to a particular case.

ARTICLE 22 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

1. This Treaty shall enter into force thirty days after the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing that their respective requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with.

2. This Treaty shall also apply to requests made in relation to acts or omissions occurring prior to this Treaty entering into force.

3. Either Contracting Party may notify the other in writing at any time of its intention to terminate this Treaty and it shall cease to be in force on the one hundred and eightieth day after the day on which notice is given.

4. Notwithstanding that a Contracting Party has given notice pursuant to paragraph 3, this Treaty continues to apply to requests made before that notice was given.

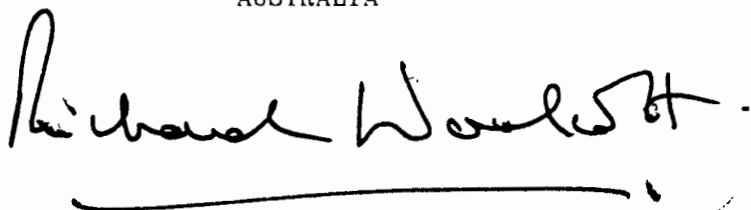
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at Buenos Aires, on the thirtieth day of August, one thousand nine hundred and ninety in the Spanish and English languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ARGENTINE REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
AUSTRALIA





EMBAJADA DE AUSTRALIA
BUENOS AIRES

Nota No 99/92

La Embajada de Australia presenta sus más atentos saludos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina - Tratados - y tiene el honor de referirse al Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de la República Argentina sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, celebrado en Buenos Aires el 30 de agosto de 1990.

Al respecto, esta Embajada tiene el honor de proponer la siguiente corrección de un error tipográfico en la versión en idioma inglés del texto de dicho acuerdo:

Artículo 13, Inciso 4 (penúltima línea): Donde dice "...or be subjected to an coercive measure..." debe decir "...or be subjected to any coercive measure...".

La Embajada de Australia tiene el honor de proponer que, si dicha corrección resulta aceptable para el Gobierno de la República Argentina, la versión en idioma inglés del acuerdo sea considerada como corregida *ab initio* al recibir una nota de ese Ministerio a tal efecto.

Esta Embajada mucho agradecería a ese Ministerio recibir una contestación a la presente a la mayor brevedad posible, dado que está previsto que el día 24 del corriente mes de noviembre de 1992 el Consejo Ejecutivo de Australia dicte las reglamentaciones correspondientes al Acuerdo que motiva esta nota.

Al agradecer lo solicitado, la Embajada de Australia hace propicia esta oportunidad para renovar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Tratados - las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1992.-



AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
- Tratados -
Buenos Aires



Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DITRA N°: 412 /92

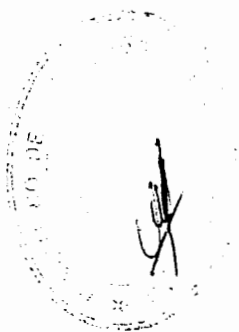
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto -Tratados- presenta sus atentos saludos a la Embajada de Australia y tiene el agrado de dirigirse a esa Representación Diplomática en respuesta a su nota de fecha 10 de noviembre del corriente.

Al respecto, este Ministerio cumple en comunicar su respuesta favorable a la propuesta de corrección del error tipográfico en la versión en inglés del texto del Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Australia sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, firmado en Buenos Aires el 30 de agosto de 1990.

Por lo expuesto, en la versión en inglés del artículo 13, inciso 4 -que se considerará como corregida "ab initio"-, donde dice "an coercitive measure" se leerá "any coercitive measure".

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto -Tratados- reitera a la Embajada de Australia las expresiones de su atenta consideración.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1992.



F. P. N. 17.601.
OSU Budo

CF 43-26944

A LA EMBAJADA DE AUSTRALIA
BUENOS AIRES